

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



**JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD**  
Bogotá D.C, Veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**  
Radicación: **2023-00004**

**I. ASUNTO:**

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por la señora **LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS** en contra de **la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMAS**, en adelante **UARIV**.

**II. ANTECEDENTES:**

**2.1.- HECHOS (SÍNTESIS):**

2.1.1.- Manifiesta el accionante que interpuso derecho de petición de interés particular ante la **UARIV** el día 04 de noviembre de 2022, solicitando fecha cierta de cuanto y cuando se va a otorgar el porcentaje de la indemnización por hecho victimizante de homicidio de CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA, el cual ya fue reconocido y registrado ante la entidad accionada.

2.1.2.- Señala que la UARIV no contesta el derecho de petición ni de forma ni de fondo.

2.1.3.- Manifiesta que al no contestar de fondo no solo viola la petición si no que vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y los demás consagrados en la tutela T 025 de 2004.

**2.2. PETICIÓN:**

Solicita, ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas contestar el derecho de petición de forma y de fondo.

Solicita, ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contestar el derecho de petición manifestando una fecha cierta de cuándo se va a cancelar el porcentaje de indemnización por el hecho de homicidio de CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA.

**III. ACTUACIÓN PROCESAL:**

Mediante auto del 13 de enero de 2023 se admitió la acción constitucional (archivo digital 07), en el que se ordenó notificar a las partes, y solicitarle a la entidad accionada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

### 3.1. RESPUESTAS:

**UARIV** (archivo digital 09): Indico que para el caso de la señora **LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS** informan que efectivamente cumplen con esta condición y se encuentran INCLUIDA en dicho registro, por el hecho de HOMICIDIO de CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA con declaración BI000324662 bajo el marco de la ley 1448 de 2011.

Señala que en respuesta al derecho de petición COD LEX 7165441, dirigida a la dirección de correo electrónico indicado por el accionante en el escrito de tutela, a saber, [LEIDIS426@GMAIL.COM](mailto:LEIDIS426@GMAIL.COM), se indicó a la señora LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS que, en cuanto a la entrega de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de HOMICIDIO, se le indicó que, la Unidad para las Víctimas está realizando las verificaciones de los documentos aportados en los diferentes sistemas de información para poder establecer de manera definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida, o si es necesario subsanar alguna novedad. Por lo que una vez, se finalice dicha validación le será informado oportunamente. Finalmente, se le remitió la certificación de la inclusión en el RUV.

Indica la accionada que con esto, la entidad ha demostrado haber atendido, de manera clara y de fondo, la solicitud realizada por los accionantes dando respuesta a los hechos invocados que fundamentan la acción, por lo tanto, conforme a las pruebas obrantes en el proceso se configura la figura del HECHO SUPERADO, aspecto que se pone a consideración del Despacho al momento de proferir sentencia.

Por lo anterior, sostiene la entidad que no ha existido ninguna vulneración por su parte de los derechos fundamentales de la tutelante o su núcleo familiar, pues ha emitido una respuesta completa, clara, concreta y congruente con lo solicitado, por tal razón se constituye un hecho superado.

Por último, solicita NÉGAR las pretensiones invocadas por la señora **LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS** en el escrito de tutela, en razón a que la Unidad para las Víctimas, tal como lo acredita, ha realizado, dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo sus derechos fundamentales.

## IV. CONSIDERACIONES:

### 4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

### 4.2.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

#### 4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa:

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”*.

En el caso bajo examen, la señora **LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS** acudió a la acción de tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales de petición e igualdad, los cuales afirma están siendo conculcados como consecuencia de la falta de una respuesta fondo por parte de la entidad accionada a su solicitud. Por lo anterior, se encuentra legitimada en la causa por activa para presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva

Como quiera que la legitimación pasiva atiende a la capacidad legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”* o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto *sub-judice*, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de la **UARIV**, a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta de fondo a su petición.

- Inmediatez

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que *“La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”*.

En el presente asunto, se tiene que, entre la fecha de radicación de la petición por parte del accionante ante la **UARIV**, 04 de noviembre de 2022, y en la que presentó la acción constitucional, 12 de enero de 2023 (archivo digital 05), han transcurrido más de veinte (20) días por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: *“(…) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente”*.

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte de la entidad accionada a la petición que elevó el 04 de noviembre de 2022, lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

#### **4.3. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:**

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)”*. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

*“1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:*

*(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;*

*(ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;*

*(iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;*

*(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable”.*

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

*“la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional “consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada”. Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, “pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución”*

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: *“(…) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)”.*

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

## V. CASO EN CONCRETO:

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si la **UARIV** vulneró los derechos fundamentales de petición e igualdad de la señora **LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS** respecto de la solicitud que radicó el día 04 de noviembre de 2022.

5.2.- Se encuentra incorporada al expediente la petición elevada por la accionante ante la **UARIV** el día 04 de noviembre de 2022 bajo el radicado No **2022- 8435679-2**, solicitando:

“(…)

Señores,  
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
Ref.: DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR  
De: LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS.  
ASUNTO: Solicitar CONTESTACIÓN DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA.  
Rad. INDEMNIZACIÓN POR EL HECHO VICTIMIZANTE DE HOMICIDIO DE MI PADRE CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA.  
LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No 1 052 950 477. Obrando en causa propia. Por medio del presente escrito respetuosamente manifiesto a ustedes que presento Derecho de petición de interés particular. Que indicaré en la parte petitoria de este escrito.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS.

Soy víctima del desplazamiento forzado y figuro ante ustedes ostentando esta calidad en esta entidad. Ya firme el formulario del plan individual para reparación integral (PARRI) con participación y con radicación de INDEMNIZACIÓN DE HOMICIDIO DE MI PADRE CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA. Donde se anexaron los documentos. Donde manifestaron que en UN mes pasará por la carta cheque para cobrar la indemnización por víctimas de HOMICIDIO DE MI PADRE CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA.

Me he presentado en varias oportunidades a los centros dignificar para retirar esta carta cheque. Sin que me la hayan entregado.

Ustedes manifestaron que para esta INDEMNIZACIÓN. De acuerdo a la ley y de haber firmado el formulario antes citado, en un mes me cancelaban esta INDEMNIZACIÓN DE HOMICIDIO DE MI PADRE CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA.

En otra respuesta manifestaron que contaban 120 días hábiles término que ya se venció. Sin recibir una respuesta definitiva.

PETICIÓN.

Por lo anterior solicito de la manera más respetuosa, a la persona encargada.

De acuerdo a lo anterior y de acuerdo al formulario diligenciado. En mi caso de INDEMNIZACIÓN POR EL HECHO VICTIMIZANTE DE HOMICIDIO DE MI PADRE CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA. En particular CUANDO me entregan la carta cheque.

De acuerdo a mi proceso. Se me asigne una fecha exacta del Desembolso de estos Recursos.

Ya se vencieron los 120 días hábiles sin a la fecha recibir una respuesta de fondo.

Se me expida una copia de certificación de inclusión en el RUV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Del orden constitucional  
Art. 23 Derecho de Petición.  
Art. 5 del C.C.A.  
Y subsecuentes.

NOTIFICACION.

Al peticionario LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS. En la Calle 34B Sur Nro.87F-28 Patio Bonito - Kennedy - Bogotá. Cel.313 465 1081 - leidis426@gmail.com

De la persona encargada, atentamente,

LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS.  
C.C. 1.052.950.477.

2022-8435679-2  
Fecha Rad: 2022-11-04 11:25: Ux MVO  
Proceso: GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO

(Página 4, archivo digital 03)

5.3.- Como respuesta, la **UARIV** emitió los siguientes comunicados dirigidos a la accionante:

- Comunicación **de fecha 17 de enero de 2023:**

“Señor (a):  
LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS  
[LEIDIS426@GMAIL.COM](mailto:LEIDIS426@GMAIL.COM)  
TELÉFONO: 3134651081

Asunto Respuesta derecho de petición Cod Lex. 7165441 M.N. Ley 1448 de 2011 D.I. # 1052950477

Cordial Saludo,

Dando respuesta a su petición, relacionada con la entrega de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de HOMICIDIO de CARLOS MIGUEL MARTINEZ ARRIETA con declaración BI000324662 bajo el marco de la ley 1448 de 2011; me permito informar que, se está realizando las verificaciones de los documentos aportados en los diferentes sistemas de información para poder establecer de manera

*definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida, o si es necesario subsanar alguna novedad. Por lo que una vez, se finalice dicha validación le será informado oportunamente.*

*Conforme a su solicitud, me permito adjuntarle la Certificación de Inclusión en el RUV.*

*Para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es importante contar con su opinión para mejorar nuestros servicios de atención al usuario. Para ello lo (a) invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en la página web <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/encuesta-de-satisfaccion/37436>, le agradecemos su participación.*

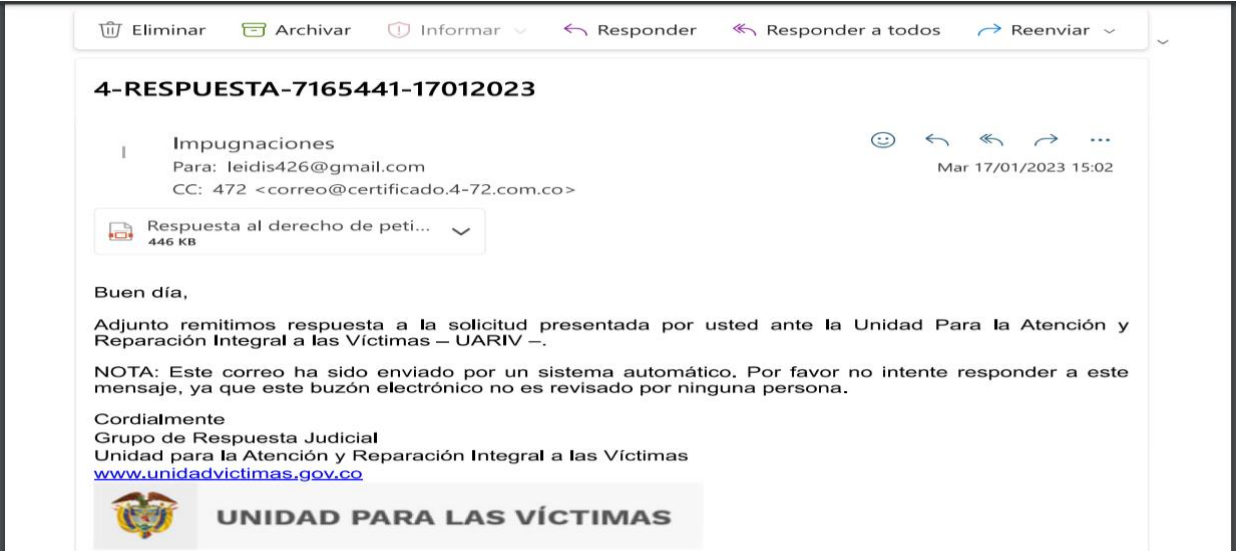
*Para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es importante contar con su opinión para mejorar nuestros servicios de atención al usuario. Para ello lo (a) invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en la página web <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/encuesta-de-satisfaccion/37436>, le agradecemos su participación.” (Páginas 9-10 archivo digital 009)*

5.4.- Teniendo en cuenta lo anterior, refulge para este Despacho Judicial que en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el derecho fundamental de petición invocado por la señora **LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS** en su escrito de tutela, al momento de proferirse este fallo ya no se encuentra conculcado, por lo que una intervención del juez constitucional en aras de garantizarlo resultaría ineficaz.

Lo anterior, como quiera que la **UARIV** atendió de manera clara, congruente y de fondo la solicitud elevada por la accionante el 04 de noviembre de 2022, ya que, por un lado, le explicó a la accionante que, se está realizando las verificaciones de los documentos aportados en los diferentes sistemas de información para poder establecer de manera definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida, o si es necesario subsanar alguna novedad. Por lo que una vez, se finalice dicha validación le será informado oportunamente.

Lo anterior, le fue debidamente comunicado a la señora **LEIDIS MARIA MARTINEZ ROJAS** al correo electrónico aportado en su solicitud [LEIDIS426@GMAIL.COM](mailto:LEIDIS426@GMAIL.COM) (página 14,15, archivo digital 009).





En consecuencia, como quiera que, del análisis probatorio acopiado al expediente se logró determinar qué, fue con ocasión de la promoción de la presente acción constitucional admitida el **13 de enero de 2022** (archivo 07), que la entidad accionada emitió el oficio **de fecha 17 de enero de 2022**, con el cual dio respuesta de fondo a la solicitud radicada por la tutelante el 04 de noviembre de 2022, deriva en el encausamiento de lo regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, que establece claramente que la procedencia de la acción de tutela declina cuando el hecho vulnerador del derecho fundamental se ha superado o, simplemente, desaparecen para el momento del fallo las causas que dieron lugar a su interposición, pues la jurisprudencia ha considerado que, en esa hipótesis, ningún objeto tendría una determinación judicial de impartir una orden de amparo.

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, resulta forzoso concluir que, en el presente amparo constitucional ya no se encuentran amenazados los derechos fundamentales invocados por la tutelante en su escrito, al haberse configurado el fenómeno del hecho superado.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley”,

**VI. RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR** la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del asunto de la referencia.



**SEGUNDO: NOTIFICAR** esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

**TERCERO:** Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

**CÚMPLASE**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, followed by three small dots.

**CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ**  
**JUEZ**

AP